

Presidente de la República

Ernesto Samper Pizano

Debido proceso al presidente

Convocatoria extraordinaria del honorable Congreso de la República

Precisamente por eso he venido al Congreso: a pedir un debido proceso, dentro de la Constitución y la ley como lo plantearon en el día de ayer distinguidos expresidentes de mi partido.

Asisto a la instalación de esta convocatoria extraordinaria del Congreso de la República en medio de tiempos difíciles, tiempos de crisis.

Por primera vez en muchos años está amenazada la estabilidad institucional de la República.

El año pasado, al conocerse el fallo de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en relación con mi conducta frente a la campaña que me llevo a la Presidencia de la República, me comprometí con la opinión nacional a que abriría un debate público sobre estos hechos para que fueran sometidos a un minucioso escrutinio.

La semana pasada conocimos otras revelaciones del exministro Fernando Botero en el mismo sentido.

Vengo a pedirle al Congreso Nacional que se haga justicia y a afrontar la responsabilidad de este debate. Lo hago en mi condición de presidente y de ciudadano.

Confío en que los debates que se adelanten en este recinto se llevarán dentro del espíritu patriótico y de mesura que las difíciles circunstancias por las que atraviesa la nación exigen. Los ojos de las futuras generaciones de colombianos habrán de examinar el sentido patriótico con que hayamos enfocado esta encrucijada.

Apelo a los medios de comunicación para que brinden una información reposada y objetiva de cuanto aquí se diga.

Pido al Congreso que se me investigue en forma rápida para la solución definitiva de esta crisis.

Algunos voceros de opinión han anticipado ya su inapelable fallo de culpabilidad y otros han llegado a proponer mi condena sin fórmula de juicio.

Rechazo esta conducta por injusta y peligrosa.

El día que aceptemos que los juicios puedan resolverse fuera de los estrados judiciales, estaremos restableciendo el linchamiento sin derecho a ser oídos. Es la sensación que yo he experimentado varias veces en los últimos meses, cuando se ha atacado mi honra y la de mi familia con crueldad nunca antes conocida.

Precisamente por eso he venido al Congreso: a pedir un debido proceso, dentro de la Constitución y la ley, como lo plantearon en el día de ayer distinguidos expresidentes de mi partido.

Se ha demostrado que el más inerte de los ciudadanos frente a la acción de la justicia es el propio presidente de la república.

El recuento de la manera como ha sido desconocido mi derecho de defensa en los últimos meses produce escalofríos.

Si realmente fuera yo culpable, mis enemigos no habrían requerido de tantos esfuerzos como han aplicado para ocultar mi inocencia.

La lista de obstáculos interpuestos es larga y variada.

Mi abogado defensor, el doctor Antonio José Cancino, fue víctima de un atentado contra su vida porque descubrió la verdad de la financiación de mi campaña que obra en el expediente de la Comisión de Acusaciones.

Con argucias legales, que fueron negadas por la acción ecuaníme de la Corte Constitucional, se intentó quitar competencia a mi juez natural para adelantar el proceso.

A lo largo de este tiempo, he recibido permanentes amenazas de muerte contra mi familia que se han intensificado en estos días.

A Jacquin, mi mujer, se la trató, sin razón ni derecho, de someterme a la acción de la justicia sin rostro para debilitarme afectivamente.

En la prensa internacional he sido presentado poco menos que como un delincuente, con consecuencias lamentables para mi honra y la del país.

Para no descuidar flanco alguno que pudiera sembrar alarma y desestabilizar al Gobierno, algunos círculos se apresuraron a anunciar una supuesta Crisis económica que los índices de crecimiento, el descenso de la inflación y las cifras de inversión extranjera han desmentido de manera categórica.

Se llegó incluso, en un acto de irresponsabilidad, a poner en duda la lealtad de las Fuerzas Armadas a la Constitución, una bomba de zozobra que también ha quedado desactivada.

Hoy más que nunca nuestra Fuerza Pública debe ser rodeada del afecto ciudadano para que siga cumpliendo con su función de guardiana del Orden establecido.

Nada que constituya un tropiezo en la demostración de mi inocencia se dejó de hacer.

La política de sometimiento y cooperación con la justicia, que defendí como parlamentario y como ministro, ha sido utilizada para negociar condenas y rebajas a costa de mi prestigio.

Cualquier persona que resuelva decir algo en contra del Gobierno o de su presidente sabe que encuentra eco inmediato y altisonante a sus ocurrencias.

La calumnia convertida en testimonio transforma, de la noche a la mañana, a los villanos en héroes y a los pecadores en santos arrepentidos. Esta política que procuraba buscar la verdad a través de la colaboración

con las autoridades se ha prestado últimamente para que los culpables laven sus propias faltas ensuciando inocentes y honras ajenas.

Ha servido además para que las mentiras acordadas, concordadas y reiteradas de distintos testigos se disfracen de verdades públicas.

Con el manejo calculado y dosificado de las pruebas se ha creado una gran incertidumbre alrededor de los procesos en curso.

No se trata de un problema del señor Fiscal General de la Nación, en cuya rectitud creo, sino del sistema mismo de fiscalización y de los excesos a que él se presta.

Quiero declarar al país, con toda serenidad y con toda firmeza, que no estoy dispuesto a negociar con mi inocencia. No voy a inculpar a nadie ni a sustituir la responsabilidad del juzgamiento de ciertas conductas relacionadas con la campaña que ya tiene en sus manos la justicia.

Lo único que pido es un debido proceso.

Que se me garantice la presunción de inocencia, la libre controversia de la prueba, la audiencia pública para la defensa.

En un medio donde ya muchos pretenden hacer justicia con mano propia lo peor que nos podría pasar sería institucionalizar la arbitrariedad como forma de resolver los conflictos entre la ciudadanía.

Lo que quiero pedir a los señores congresistas, en suma, es que me juzguen prontamente y con las garantías que me reconoce la Ley. Nada más pero tampoco nada menos.

La campaña

Vengo a asumir un debate que debe ser esclarecedor para el país. Consciente de los riesgos de infiltración de dineros ilícitos que existen en Colombia establecí, al comenzar mi campaña, una alabradra de controles éticos para impedir el ingreso de estos recursos.

La campaña fue diseñada para que funcionaran con total independencia la parte política, por un lado, y, por otra, la parte administrativa y financiera que el director manejaba.

No solo eso. Desde un comienzo presenté un Código de Ética que buscaba velar por la transparencia de la campaña.

Pero las evidencias sobre una posible presencia de dineros del narcotráfico en mi campaña indican que, a pesar de nuestros esfuerzos, estos controles pudieron resultar insuficientes

Reconozco que me equivoqué en el diseño de los mecanismos de control y en el nombramiento de algunas personas que violaron en su propio beneficio las reglas que establecí.

Reconozco también que esta circunstancia le haya producido al país una indignación que yo comparto, pues como se está demostrando, soy la primera víctima de lo sucedido.

El juicio sobre la campaña misma debe seguir hasta el final. Es importante establecer quién la contaminó, cómo, cuándo y utilizando qué canales.

Y lo repito una vez más: estos actos indebidos ocurrieron sin mi conocimiento, como estoy seguro de que al final de todo este proceso quedará demostrado.

Lo que los hechos han probado ya, hasta la saciedad, es que jamás existió acuerdo de parte mía con los carteles para brindarles beneficio alguno.

Las autoridades colombianas y extranjeras encargadas del tema de la lucha contra la droga conocen la manera como personalmente conduje las operaciones que culminaron con la exitosa captura del Cartel de Cali.

Ha sido este Gobierno el que capturó y puso en manos de la Fiscalía a más de dos mil acusados de tráfico de narcóticos.

Ha sido este Gobierno el que descubrió y entregó a la autoridades las pruebas y documentos que hoy permiten adelantar causas contra ellos.

Ha sido este Gobierno el que consiguió la aprobación en este mismo Congreso del Estatuto contra lavado de activos más duro que se haya expedido en el mundo.

Ha sido este Gobierno el que ha conseguido los logros más espectaculares en destrucción de cultivos ilícitos, en la incautación de Insumos químicos, en la destrucción de aeropuertos clandestinos.

Nada de esto habría sido posible si este Gobierno no hubiera efectuado una profunda limpieza en los cuerpos de Policía de Cali.

Me siento particularmente orgulloso de que ello se logró sin disparar un solo tiro ni sacrificar la vida de ninguna persona inocente.

Como todos los colombianos, yo tampoco quiero que regrese el narcoterrorismo a Colombia.

Haré todo lo que esté a mi alcance, en mi condición de presidente, para que la lucha contra el narcotráfico no vuelva a quedar encerrada en un dilema de vida o muerte.

Con la captura del Cartel de Cali demostramos que sí somos capaces de combatir el narcotráfico sin bombas ni muertos, sin atentados contra jueces o contra la libertad de prensa.

La consulta popular

Entiendo perfectamente que las dudas que han surgido sobre la financiación de mi campaña pueden afectar la credibilidad del mandato político que recibí de los ciudadanos en las pasadas elecciones presidenciales.

Para superar esta situación y para reafirmar mi compromiso con el programa social que me llevó a la Presidencia he presentado la alternativa de convocar a una consulta popular que relegitime el mandato.

Entiendo perfectamente los reparos que desde distintos y respetables sectores de la opinión se han formulado a la consulta.

Algunos han dicho que esta apelación podría polarizar a la sociedad colombiana. La realidad es que la saciedad ya está polarizada y que la consulta podría contribuir a restablecer el consenso social alrededor de la aceptación mayoritaria de unos resultados democráticos.

Los colombianos pueden tener la seguridad que jamás convocaré a la gente que me ha estado acompañando con su solidaridad, con sus oraciones, con su respaldo a que se aventure por el camino temerario de la confrontación.

Lo único que pido de ellos es un comportamiento tranquilo y su voz de aliento solidario. Con ello me basta.

Tampoco es cierto que hayamos pretendido con la consulta evitar el proceso judicial que curso en este recinto.

De aceptarse por este Congreso la consulta como una alternativa para superar la crisis política, esta sería convocada al término del proceso judicial y solamente estaría en juego el mandato político del presidente de la república

Ante todo, el derecho al disenso

De este amargo proceso me queda una satisfacción íntima jamás utilicé el poder para desviar el curso de los acontecimientos.

Ningún juez, ningún medio de comunicación, ningún periodista puede levantar su dedo acusador para señalar que el presidente obstruyó una investigación o negoció una noticia.

Nadie puede decir que se le ha limitado su derecho legítimo a discrepar del Gobierno.

Nadie ha sido perseguido por sus opiniones especialmente cuando ellas se referían al presidente y su familia, a pesar de que se produjeron desbordamientos y excesos informativos, se tergiversaron noticias, se produjeron calumnias, se convirtieron especulaciones en certidumbres, se filtraron plazas procesales amparadas por la reserva y llegó a montarse un espectáculo sensacionalista de entrevistas internacionales con presos dispuestos a deplorar del presidente de la república y su Gobierno.

No hay duda que lograron su cometido: mi nombre ha sido mancillado por esta clase de informaciones y montajes. Paro también han atropellado la Imagen de este país que permite que sus procesadas judiciales se conviertan en estrellas de los noticieros internacionales, lo que coloca en entredicho la credibilidad de su propia justicia.

Algún día, con mayor cabeza fría, habrá que hacer un juicio sobre el grave darlo que han hecho a la imagen del país quienes no reflexionaron a tiempo en lo que estos procedimientos podrían costarle a Colombia en el exterior.

Muchas personas, frente a estos desbordamientos, llegaron a recomendarme la adopción de medidas abiertamente policías.

Tengo la satisfacción de no haberlo hecho, tal vez por la percepción de que, estando de por medio mi propia honra, no podía abonar la más mínima idea de estar obstruyendo la labor informativa sustancial a toda democracia,

Convoco esta noche a todos esos medios para que le brindemos al país una manera tranquila de resolver esta crisis. Para que permitamos que los jueces continúen cumpliendo su trabajo con la discreción necesaria, y para que los ciudadanos puedan seguir este proceso con serenidad y fe en sus instituciones.

Como presidente no guardo resentimiento con ningún colombiano; como persona debo confesar que he recibido unos reveses afectivos solo compensados por la valentía, solidaridad y lealtad de la inmensa mayoría de mis colaboradores y de quienes creen en mi proyecto.

Debo agradecer el respaldo popular que he recibido a lo largo de estos días. Me ha conmovido especialmente la presencia, en manifestaciones callejeras de ciudadanos humildes que exhiben ya los beneficios sociales obtenidos por la acción de mi Gobierno.

Salidas para la crisis

Políticos, periodistas y empresarios, gente humilde, estudiantes y candidatos presidenciales me han enviado sus fórmulas y recetas para la solución de esta crisis.

Los expresidentes liberales se pronunciaron ayer reclamando además el respaldo para el programa social que he venido adelantando en beneficio de los colombianos más necesitados.

Casi todos ellos coinciden en que la salida no puede desbordar el marco que establecen la Constitución y las leyes. Estoy de acuerdo. Mi estirpe democrática me impediría, en cualquier caso, ensayar remedios distintos.

Pero, en el mismo orden de ideos peso señalar que en ningún caso aceptaré fórmulas que supongo la dignidad de la institución de la presidencia de la república el Estado de derecho.

El pronunciamiento de este Congreso en relación con las responsabilidades políticas es tan importante como el examen riguroso de mi conducta por parte de los señores Representantes a la Cámara.

Hoy mismo he solicitado a la Comisión de Acusaciones que reabra el proceso cerrado por auto inhibitorio en diciembre pasado para facilitar la segunda instancia del proceso que debe terminar en la misma Cámara. Desde ya acojo cualquier fórmula que se acuerde para garantizar la absoluta transparencia del proceso que se inicia.

Asumo mi propia defensa porque ya no puedo pediré al abogado Cancino que siga arriesgando su vida para representarme.

Invito al señor Fiscal a que avale con su presencia el proceso.

Al terminar el debate que hoy iniciamos, y conocido el veredicto de la Cámara, tendremos que encontrar recursos para legitimar el periodo restante del mandato.

Algunos piensan que la única vía posible sería, antes o después, el retiro del presidente. Pueden tener la seguridad de que si yo estuviera convencido de que ese es el mejor camino para el país ya lo habría escogido.

Jamás he hecho ni haré nada en lo que me resta de vida pública que no atienda el beneficio de los mejores intereses de Colombia.

Reflexiones finales

La historia de pasión que he relatado no podría terminar, como toda historia, sin unas cuantas moralejas.

Reivindico ante el mundo entero el doloroso papel que ha jugado Colombia en la lucha contra el flagelo universal del narcotráfico.

Muchas veces nos hemos sentido solos en esta lucha que, como en la paradójica fábula griega de Aquiles y la tortuga, cuando ya creemos que ha avanzado lo suficiente, alguien hace ver que aún se está lejos de la meta.

De tiempo atrás, la droga, con todos sus males y corrupciones, ha venido penetrando muchas esferas de la sociedad colombiana, El país se acostumbró de cierta manera a ser tolerante con ella, y está pagando un alto precio por esa laxitud.

Pero también hemos aprendido a combatirla. Así lo proclaman los muertos ilustres y anónimos que ella ha producido, los costos económicos que hemos pagado por sostenerla y los dolores sin cuento que ha generado, dolores como el que hoy nos reúne.

Es tan legítimo el derecho de Colombia a pretender una vida libre de droga como el que la asiste para rechazar los intereses que tratan de convertir a nuestro país en una narcodemocracia para concentrar en cabeza de los colombianos la responsabilidad de combatir este fenómeno del cual no somos verdugos sino víctimas.

Con ese orgullo y dignidad, y teniendo siempre presente mi obligación de defender la soberanía nacional, me ha tocado en estos meses cargar la pesada cruz de una sociedad intencionalmente señalada ante el mundo como narcotraficante.

Quienes vengan detrás de mí comprenderán lo duro que es combatir ese estigma y las desilusiones que la lucha depara.

Los últimos meses he visto rasgarse muchas vestiduras manchadas y he mirado arrojar muchas primeras piedras que resultaron hechas del barro de la complicidad y de la permisividad con el consumo de las drogas.

Algunos convirtieron mi propia causa en la causa de sus aspiraciones futuras.

Este debate, cualesquiera sean sus consecuencias, tiene que dejamos hechos concretos y positivos. Uno de ellos es el de superar la narcotización de la opinión que ha reducido al tema de la droga todo el debate nacional.

Los colombianos quieren que les hablen de otras cosas. De empleo, de vivienda, de salud, de seguridad en sus casas, de calidad de vida.

Aprendimos la lección. Ahora encontremos los remedios definitivos.

Tenemos el deber de garantizar que el Estado financie en el futuro todas las campañas presidenciales para que no nos vuelva a ocurrir nunca esta misma pesadilla.

Y es preciso desarrollar controles más drásticos y refinados para impedir las filtraciones de dineros ilícitos no solo en la política sino en todas las áreas de actividad de la sociedad colombiana.

Señores Congresistas:

Nunca antes, como hoy, el destino de la nación había estado tan determinan-
tamente en sus manos. Ustedes tienen la grave responsabilidad de de-
finir en buena medida el futuro nacional.

Contra lo que algunos piensan, la inmensa mayoría de la clase política,
aquí representada, es honesta, sensible a los problemas del país y con inte-
rés de acertar en la solución de los mismos.

Yo tengo fe que este recinto estará a la altura histórica que de él de-
manda.

Ustedes representan además la provincia colombiana que ha sido tan
solidaria con el Gobierno nacional, a través de sus gobernadores y alcalde
con toda esta crisis.

Quien les habla fue víctima hace algunos años de un atentado físico di
cual logro sobrevivir gracias a la ayuda de Dios y a una infinita capacidad
de amar la vida.

Ahora he sido víctima de un atentado moral por cuyas consecuencias
personales y políticas me presento a responder con la frente digna.

Después de la segunda oportunidad de vivir que me gané, ya no tengo
nada que pedirle a la vida, excepto el derecho a seguirles sirviendo a todos
los colombianos, para recibir de ellos el único título al cual aspiro al final
de mi mandato; el de haber sido un presidente honesto que convirtió la
atención de las necesidades sociales en su brújula y destino.

Ernesto Samper Pizano

